

RELATORÍA JURÍDICA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Lunes 06 de Abril de 2015

Dirección Jurídica convoca a abogados apoderados a Comité Técnico

El Director Jurídico, Carlos Humberto Sánchez Llanos, convoca a todos los abogados apoderados de las dependencias de la Administración Central Municipal, a la realización del Comité Técnico que tendrá lugar el jueves 09 de abril de 2015, de 2:00 a 5:30 de la tarde.

El evento se realizará en el Auditorio de Comfenalco Torre C - Piso 5, en la calle 5 # 6 – 36.

El Comité Técnico se realiza en desarrollo del Modelo de Gerencia Jurídica Pública a que se refiere el Decreto Municipal No. 411.0.20.0492 de 04 de Agosto de 2014, y de conformidad con el artículo 60 del Decreto Extraordinario 0203 de 2001.

Se presentará la “Guía del Apoderado Judicial del Municipio de Santiago de Cali”, editada por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y el Director Jurídico Carlos Humberto Sánchez Llanos, trazará las pautas, directrices y políticas en materia jurídica, para la vigencia 2015, conjuntamente con su equipo de trabajo.

Al final de la jornada, el grupo de criminalística de la Secretaría de Tránsito realizará una charla sobre la tecnología implementada en materia de criminalística, dirigida a los apoderados que llevan la representación, en procesos de reparación directa por hueco en la vía.

El cupo es para 200 personas. Mayor información: 8896744.
dirjuridica@cali.gov.co

Acción contractual de Fundación Plaza de Toros de Cali contra Municipio de Cali compete a Tribunal de arbitramento

El Despacho del Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón encontró la configuración de dos causales de nulidad procesal insaneables, como son la falta de jurisdicción y de competencia funcional, en atención a la existencia de cláusula compromisoria pactada en el contrato de sociedad, aplicable a las diferencia por razón de la cesión de acciones materia de la controversia, dentro del cual son accionistas todas las

partes de este proceso, por lo que procedió a decretar la nulidad de lo actuado y ordenó ser sometido a la justicia arbitral.

Las partes deberán iniciar el trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Cali.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N35765 (03858-01) Contractual 2015/01/26

Hasta el 30 de abril tienen plazo las entidades territoriales para reportar empleos de carrera en vacancia definitiva

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) recordó a las entidades territoriales que se rigen en materia de carrera administrativa por la Ley 909 del 2004 o por normas que regulan sistemas específicos de carrera administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil que tienen plazo hasta el jueves 30 de abril para reportar los empleos de carrera que se encuentran en vacancia definitiva y suministrar la información correspondiente a la contratación de prestación de servicios de personas naturales y jurídicas.

Para cumplir con el reporte, los representantes legales de las entidades lo podrán hacer a través de la página web del Sistema Único de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), ingresando el botón reporte de información de la sección servicios del portal.

Con el propósito de facilitar el proceso, el DAFP diseñó el instructivo de diligenciamiento del reporte. Igualmente, para brindar mayor información, la Función Pública también dispuso el correo electrónico planvacantes@funcionpublica.gov.co y el teléfono (1) 2437100, correspondiente a la Dirección de Empleo Público de esta entidad. (Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular externa 004, 3/31/2015) Noticia generada en Abr. 6/15

Vulneró el de petición a desplazado por no informar hechos en que se basó para determinar incumplimiento de requisitos

La accionada omitió responder derecho de petición en que actor le indicó que lo incluyera en el Registro Único de Víctimas, RUV, por su condición de desplazado.

Al conceder el amparo, la Sala reiteró su jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho fundamental de petición, y, sobre el marco normativo para la inscripción en el RUV así como las pautas jurisprudenciales que determinan su aplicación.

Concluyó que la entidad sí vulneró el derecho fundamental de petición del actor, porque en la respuesta que expidió no le informó los hechos en los cuales se basó, para determinar que no cumplía con los requisitos para ser incluido como desplazado.

CorteConstitucional-T-2015-N0001 (T-4495230) Sentencia 2015/01/15

Ante falta de jurisdicción, lo procedente era la declaratoria de nulidad de lo actuado por juez civil: Consejo de Estado

“La ley es clara frente a la imposibilidad de sanear la nulidad proveniente de la falta de jurisdicción, situación que tiene como efecto inevitable la invalidación de todo el proceso debido a que el trámite es diferente y se rigen por codificaciones distintas”, pues “los asuntos que debe conocer una jurisdicción no pueden ser tramitados ni decididos por otra”.

“En materia de nulidades procesales el Código Contencioso Administrativo remite expresamente a lo dispuesto en la ley procesal Civil. Esta última codificación señala taxativamente las causales de nulidad dentro de las cuales se encuentra la falta de jurisdicción. Desde otro punto de vista, la ley es clara frente a la imposibilidad de sanear la nulidad proveniente de la falta de jurisdicción, situación que tiene como efecto inevitable la invalidación de todo el proceso debido a que el trámite es diferente y se rigen por codificaciones distintas pero, se reitera, determina que la prueba practicada válidamente conservará su validez y eficacia respecto a quienes tuvieron la oportunidad de contradecirla”.

Por lo tanto, La Corporación consideró improcedente la impugnación realizada por la demandante, quien alegaba que el Tribunal de Cundinamarca, al declarar que un juzgado civil no tenía competencia para conocer del proceso, no debió invalidar lo realizado por este sino simplemente remitirlo al juez competente, tesis que no compartió La Sala ya que “en el proceso de la referencia efectivamente se configuró una causal de nulidad absoluta insanable, por falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer del asunto, lo que facultaba al tribunal para declarar de manera oficiosa la nulidad de todo lo actuado.

En consecuencia, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de las actuaciones surtidas en la jurisdicción civil, se concretó acertadamente en la normatividad anteriormente referida, máxime cuando en aplicación de los efectos que concibe el artículo 146 del C.P.C., se declaró válida la prueba legalmente recaudada durante el trámite de la misma”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N46863 (00143-01) Contractual 2014/11/26

ISS abusó en celebración de contratos de prestación de servicios para negar verdadera relación de trabajo subordinado

El Instituto de Seguros Sociales enfrentó proceso laboral adelantado por ciudadana que buscaba se declarara que entre las partes existió una relación laboral desde 1996 a 1999, mediante 8 contratos de trabajo, en calidad de trabajadora oficial. Como consecuencia solicitó el pago debidamente indexados de las cesantía y sus intereses, sanción moratoria, primas de servicio, navidad, vacaciones; las horas extras diurnas y nocturnas, entre otros.

La Sala casó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla y, en su lugar, condenó al ISS a pagar cesantías, prima de servicios, vacaciones y prima de navidad. Revocó la parte que absolvió a la demandada del pago de la sanción moratoria y, en su lugar, la condeno a ello. Anotó la Sala que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado, lo que reafirmó la mala fe de la entidad empleadora.

Corte Suprema de Justicia CSJ-SCL-EXP2014-N43457-SL9641 Sentencia 2014/07/23

Recuerdan diferencias entre la nulidad y la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

De acuerdo con el Consejo de Estado, no puede confundirse la ocurrencia de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del mismo.

Según el alto tribunal, las causales de nulidad se encuentran previstas en la ley y se dan desde la misma formación o expedición del acto, bien

sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o desviación de poder.

Por su parte, recordó que la pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto referido, específicamente, a uno de los atributos o características del acto administrativo, como lo es la ejecutividad del mismo; es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obediencia, tanto por parte de la administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda.

Para la corporación, dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo se encuentra la desaparición de sus fundamentos de derecho, cuya ocurrencia no afecta la validez del acto, en cuanto deja incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de este que es el objeto de la acción de nulidad.

Por lo mismo, concluyó que tales causales de pérdida de ejecutoria vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del acto de que se trate, y no tienen la virtud de provocar su anulación (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

(Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 76001233100020090116401 (19154), 3/12/2015) Noticia generada en Abr. 1/15 (11:24 a.m.)

Publicado en Diario oficial decreto que reglamenta medidas de seguridad en piscinas del territorio nacional

“Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente título es determinar las medidas de seguridad aplicables a los establecimientos de piscinas de uso colectivo abiertas al público en general que deben ser cumplidas por los responsables de las mismas, tendientes a prevenir y controlar los riesgos que afecten la vida y la salud de las personas. Artículo 2°. Campo de aplicación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 2°, 4°, literal b), y 11 de la Ley 1209 de 2008, las disposiciones del presente título se aplican a las personas naturales o jurídicas que presten servicio de piscina abierto al público en general, ubicadas en instalaciones tales como: centros vacacionales y recreacionales, escuelas, entidades o asociaciones, hoteles, moteles o similares”.

Ocupación permanente de predio por la Administración debe demandarse en reparación directa y no en restablecimiento

“Como se desprende del líbello demandatorio, si bien, el demandante, de manera temeraria provocó el pronunciamiento de la administración, luego de pronunciarse la jurisdicción de lo contencioso sobre el daño antijurídico aparentemente causado con ocasión de la ocupación permanente del bien que aduce es de su propiedad, se tiene que el medio de control que debió ejercerse es el de reparación directa como lo señala el Tribunal y no el de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto, el perjuicio reclamado deviene de la ocupación permanente y no del acto administrativo que demanda ante esta jurisdicción”.

“Se aclara, que la escogencia del medio de control no depende del arbitrio del actor, sino que por el contrario, el legislador ha establecido diversos medios de control atendiendo a la naturaleza de las pretensiones solicitadas por los administrados con miras a garantizar el acceso a la administración de justicia”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N51933 (00123-01) Nulidad-Restab 2014/11/12

Tiempo laborado por docente en instituto campestre de Sibaté, Cundinamarca, es apto para ser computado en pensión gracia

El Consejo de Estado señaló que la demandante, Lida Mercedes Buitrago Valbuena, “no sólo se desempeñó como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, tal y como lo exigía la Ley 91 de 1989, sino que dicha vinculación se efectuó en instituciones de educación oficial del nivel territorial, esto es, del Departamento de Cundinamarca”.

La Sala “no comparte el argumento de la parte demandada según el cual el Instituto Campestre Sibaté, Cundinamarca, no contaba con el carácter de centro educativo oficial toda vez que, el mismo, al encontrarse adscrito a la Beneficencia de Cundinamarca, tenía por objeto prestar asistencia social, concretamente, en lo relacionado con la administración de los servicios educativos en los distintos municipios del departamento de Cundinamarca”.

“Bajo estos supuestos no hay duda que, el tiempo laborado por la señora Lida Mercedes Buitrago Valbuena al servicio del Instituto Campestre de Sibaté, Cundinamarca, resulta apto para ser computado a efectos de reconocerle la prestación pensional de jubilación gracia solicitada”.

Así, concluyó la Corporación que “estando debidamente demostrado que la demandante en el caso concreto laboró como docente durante más de 20 años, incluso con anterioridad del 30 de diciembre de 1980, en instituciones educativas exclusivamente oficiales del nivel territorial, se hacía necesario estimar su pretensión de nulidad y, en consecuencia, acceder las pretensiones de la demanda como lo ordenó el Tribunal en la sentencia apelada”.

Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2014-N02414-13 (00909-01) Nulidad-
Restab 2014/07/10

Ley de protección de datos personales aplica a bases de datos de entidades públicas y privadas

“Por lo anterior, la Ley 1581 de 2012 se aplica a los datos personales que se encuentren en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas, entendidos estos, como el conjunto organizados o depósitos ordenados de datos personales sujetos a tratamiento, es decir, a la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o la supresión de los mismos”.

SuperIndustria-Concepto-2014-N0241378 2014/11/19

Conozca todas las sentencias de constitucionalidad que proyectó Carlos Gaviria

Varias decisiones proyectadas por el fallecido jurista, en el periodo 1993 - 2001, fueron la base de la transformación de ciertas políticas públicas, como sucedió con la despenalización del homicidio por piedad (Sentencia C-239/97) y la del consumo de la dosis mínima de droga, que estaba sancionada por los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986, declarados inexecutable en la Sentencia C-221/94.

Otros aportes destacados en su paso por el alto tribunal son las limitaciones impuestas a los estados de excepción (Sentencia C-179/94) y la inconstitucionalidad de la reglamentación al ejercicio del periodismo,

pues consideró que no podía limitarse el acceso a este oficio a quienes no fueran comunicadores (Sentencia C-087/98).

Frente al derecho a la igualdad y el principio de prohibición de la discriminación, cabe recordar que Gaviria proyectó el retiro del ordenamiento de una norma del Código Civil que anulaba el matrimonio de "la mujer adúltera con su cómplice", pero que no hacía lo propio con el hombre que incurriera en la misma conducta (Sentencia C-082/99).

Gaviria tampoco fue partidario de la detención de conductores en estado de embriaguez, pues fue el autor del fallo que declaró inconstitucionales las normas que permitían el arresto, inclusive si el estado de alicoramiento no generaba delito (Sentencia C-189/99).

Además, fue ponente de la inexequibilidad del artículo 4º (parcial) del Decreto 2265 de 1991, que eliminaba, en el marco de un estado de excepción, el beneficio de no extradición como mecanismo premial de colaboración con la justicia (Sentencia C-092/98).

En el documento adjunto encontrará la lista con todas las sentencias proferidas por el exmagistrado. *Si accede a la dirección adjunta y se encuentra en su puesto de trabajo en la Alcaldía de Santiago de Cali, podrá acceder a la sentencia a través del hipervínculo*, de lo contrario, vea el documento adjunto.

<http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/documento-sentenciascarlosgaviria-15.pdf>

(Corte Constitucional, Documento, 04/01/2015)

Lunes 13 de Abril de 2015

Plazo para la liquidación de los contratos - Aplica también en los contratos interadministrativos.

La competencia temporal de la administración para liquidar los contratos estatales, conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, aplica también en los contratos interadministrativos, pues la liquidación unilateral del contrato es una facultad legal pero no de aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante ya que la Ley 80 de 1993 en ninguna parte la enlista como tal. En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado en reciente providencia.

Se tiene entonces que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual.

En todo caso, es pertinente mencionar que la liquidación del contrato alude a aquella actuación administrativa por medio de la cual posterior a la terminación normal o anormal del contrato las partes buscan definir si existen prestaciones obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar las prestaciones adeudadas y a cargo de quién se encuentran para luego proceder a realizar las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a los que haya lugar para de ésta forma dejar a paz y salvo la relación comercial respectiva.

Ley de garantías electorales- disposiciones aplicables a todas las elecciones.

Teniendo en cuenta que en Colombia el próximo 25 de octubre de 2015 se llevarán a cabo las elecciones regionales, se considera pertinente mencionar que el Consejo de Estado se pronunció en su momento indicando que las expresiones: “dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones y “dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular” contenidas en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005, hacen referencia a todas las elecciones para cargos de elección popular a que se refiere dicha ley.

En este sentido, se indica que las restricciones operan desde la medianoche del miércoles 24 de junio de 2015, para lo cual, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, con ocasión a las elecciones, deben tener en cuenta que, en materia de contratación, la prohibición opera para la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

En todo caso, en relación con la Ley de Garantías Electorales se sugiere la lectura de los siguientes conceptos en los cuáles se pronunciaron en relación con la aplicación de la ley de garantías electorales en los casos de elecciones territoriales:

Ley de Garantías. Ley 996 de 2005 - Alcance de los artículos 32, 33 y 38.

Ver texto del Concepto 1717 de 2010.

Prohibiciones a los servidores públicos. Utilización de bienes de uso público para actividades de proselitismo político.

Ver texto del Concepto 1845 de 2006.

Ley de Garantías. Ley 996 de 2005 - Aplicación elección de Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados y miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Ver texto del Concepto.

En todo caso, se sugiere la lectura integral del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que a continuación se transcribe:

“ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido:

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
5. Aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de carrera.

La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.

PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.”

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co